

PONENCIA DEL LCDO. RAFAEL HERNANDEZ COLON,  
SOBRE EL P. DEL S. 2656 (P. de la C. 3559)

Agradezco la invitación a comparecer ante esas Honorables Comisiones el jueves 24 de agosto de 2000, a las 10:00 A. M. para prestar testimonio sobre el P. del S. 2656 (P. de la C. 3559) que tiene el propósito de viabilizar el derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos de América en Puerto Rico, a votar en las elecciones para los cargos de Presidente y Vice Presidente de los Estados Unidos.

Porque me encontraré en esos momentos fuera del país, paso respetuosamente a someter mi testimonio mediante la presente comunicación, rogando a esas Honorables Comisiones que excusen mi presencia en la vista.

El P. del S. 2656 (P. de la C. 3559) parte de la premisa de "que el sufragio universal es una función de la ciudadanía y un derecho fundamental inherente a esta" <sup>1</sup> para viabilizar el voto presidencial para los ciudadanos de Estados Unidos residentes en el Estado Libre Asociado. Esta premisa es errónea. Veámos:

Dentro del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos de América al cual pertenece Puerto Rico, el derecho al voto se confiere por las Constituciones o legislación de los estados, del Estado Libre Asociado, de los territorios, o del Distrito de Columbia. Bajo la Constitución federal el derecho al voto es un derecho o privilegio político que otorgan los estados, el Estado Libre Asociado, los territorios o el Distrito de Columbia; no es un derecho fundamental, ni uno de los derechos civiles, ni un derecho de la persona.

---

<sup>1</sup> Exposición de Motivos.

El Artículo II, Sección 1, y las enmiendas XII y XXIII de la Constitución de los Estados Unidos reconocen sólo a los estados y al Distrito de Columbia, la facultad de proveer para el derecho a votar por el Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos. Esa facultad no se le reconoce al Estado Libre Asociado ni a los territorios.

La Constitución del Estado Libre Asociado concede el derecho al voto y lo protege bajo el Artículo II, Sección 2 y el Artículo VI, Sección 4 para fines de las elecciones que de acuerdo con nuestra Constitución y nuestras leyes, deben llevarse a cabo en el Estado Libre Asociado. La elección del Presidente de los Estados Unidos no es una de ellas.

Puesto que bajo nuestra Constitución no se vota por el Presidente de los Estados Unidos, el P. del S. 2656 predica la base legal bajo la cual pretende legislarse como la de un derecho fundamental inherente a nuestra ciudadanía de los Estados Unidos de América. Esto no es correcto.

El derecho al voto no es un derecho fundamental ni inherente a la ciudadanía de los Estados Unidos de América. Esto ha sido decidido reiteradamente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. *Pope v. Williams*, 193 U.S. 621; *Maxwell v. Dow*, 176 U.S. 581; *United States v. Cruikshank*, 92 U.S. 542; *Minor v. Happersett*, 88 U.S. 627 (1874).

La Constitución federal protege pero no concede el derecho al voto. Como señaló el Supremo federal en el citado caso de *Minor*, "the Constitution of the United States does not confer the right of

sufferage upon anyone". Ahora bien, la Constitución federal sí protege el derecho al voto que conceden los estados, el Estado Libre Asociado, los territorios o el Distrito de Columbia contra todo intento de discriminarlo o de devaluarlo o de menoscabarlo. "It is clear that the voting rights of Puerto Rico citizens are constitutionally protected to the same extent as those of all other citizens of the United States". *Rodríguez v. Popular Democratic Party*, 457 U.S. 1.

Para proteger el derecho al voto de los ciudadanos de Estados Unidos, se legislaron expresamente las enmiendas XV, XIX, XXIV y XXVI. La XIX fue necesaria porque como consecuencia de la doctrina de *Minor*, supra, a los efectos de que el derecho al voto no dimanara de la Constitución federal, se podía discriminar contra el voto por razón de sexo. Por ser ésta una práctica extendida al fundarse la república, había que enmendar la Constitución para prohibir ese discrimen. Se enmendó la Constitución para prohibir ese discrimen pero no se enmendó para establecer que el derecho al voto es inherente a la ciudadanía.

Además de utilizar las anteriores enmiendas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en sus decisiones y el Congreso en su legislación de derechos civiles han utilizado el derecho al debido proceso y a la igual protección de las leyes dimanantes de las enmiendas V y XIV como manto protector del derecho al voto contra discrimenes y menoscabos pero jamás han considerado estas disposiciones o las citadas enmiendas como fuentes de origen de tal derecho.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es rica en expresiones retóricas sobre la importancia del derecho al



voto. Pero todos los casos están predicados en el derecho al voto que confieren los estados, el Estado Libre Asociado, los territorios o el Distrito de Columbia, no la Constitución federal.

Ningún caso decidido por ese tribunal ni siquiera se acerca a considerar el derecho al voto como un derecho fundamental en el sentido técnico constitucional o como inherente a la ciudadanía. Sabido es que los derechos fundamentales de los seres humanos, no sólo de los ciudadanos, están protegidos por la Constitución federal, contra acción del Congreso, o de los estados y que esta protección se extiende a Puerto Rico desde que se estableció esta doctrina en el caso de *Downes v. Bidwell*, 182 U.S. 244 (1901). El derecho al voto nunca se ha considerado como un derecho fundamental dentro del significado técnico-constitucional de este concepto.

Pero ciertamente hay muchas expresiones en la jurisprudencia federal destacando la importancia del derecho al voto. La expresión del Juez Black en *Wesberry v. Sanders*, 376 U.S. 1 (1964), es quizás la más liberal de todas cuando nos dice que no hay un derecho más precioso que este porque de él dependen todos los demás derechos. Sin embargo esa expresión de ninguna manera le brinda el carácter de derecho fundamental en el sentido técnico-constitucional. Tampoco Black califica el derecho al voto de inherente a la ciudadanía. Lo que dice es que la Constitución federal no permite clasificación alguna que lo menoscabe.

Puesto que el derecho al voto por el Presidente de Estados Unidos no es un derecho fundamental, ni la ciudadanía de Estados Unidos entraña el derecho a votar por el Presidente, el P. del S. 2656

(P. de la C. 3559), es constitucionalmente vulnerable porque no existe base legal para su aprobación por esa Honorable Legislatura.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

RAFAEL HERNANDEZ COLON

FUNDACION

BIBLIOTECA

RHC

